



Bogotá D.C.
03 de abril de 2013

Doctor
AUGUSTO POSADA SÁNCHEZ
Presidente
Cámara de Representantes
Ciudad,

REF: Informe de Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley No. 193 DE 2012 Cámara “por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro témpore al Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas”.

SINTESIS DEL PROYECTO

A través de éste Proyecto de Ley se otorgan facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar y definir la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación, modificar la planta de personal, expedir el régimen de carrera especial para los funcionarios de la Fiscalía y crear un establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la Nación.

TRÁMITE DEL PROYECTO

Origen: Gubernamental.

Autor: Dra. Ruth Stella Correa Ministra de Justicia y del Derecho.

Proyecto Publicado: Gaceta No. 732 de 2012.

Ponencias Primer Debate: Gaceta No. 863 y 882 de 2012.

COMPETENCIA Y ASIGNACIÓN DE PONENCIA

En sesión de la Comisión I de la Cámara de Representantes del día 12 de diciembre fui asignado como ponente en segundo debate de éste proyecto de ley.



ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El Proyecto de ley consta de tres (3) artículos descritos a continuación:

Artículo 1°.	Reviste de facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar y definir la estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación, modificar la planta de personal, expedir el régimen de carrera especial para los funcionarios de la Fiscalía y crear un establecimiento público adscrito a la Fiscalía General de la Nación
Artículo 2°.	Crea una comisión de seguimiento a los decretos que se dicten en uso de las facultades extraordinarias, conformada por tres Senadores y tres Representantes a la Cámara.
Artículo 3°.	Vigencia.

COMENTARIOS DE LOS PONENTES

El otorgamiento de facultades extraordinarias al Presidente de la República fue consagrada en la Carta Política de 1991 como una figura excepcional con unos específicos límites mediante los cuales se superó la amplitud de esta facultad establecida en la Constitución de 1886¹ y se dejó como una figura para ser utilizada bajo ciertos preceptos y parámetros específicos.

La excepcionalidad de esta herramienta jurídica se sustenta en el principio democrático, de tal suerte que las normas legales sean expedidas por el órgano deliberativo de representación democrática como lo es el congreso de la República.

Sin dudar de la importancia de la iniciativa puesta en consideración de los miembros de la plenaria de la Cámara de Representantes, es necesario establecer como la misma es inconveniente, por cuanto no se da ningún espacio de regulación en la materia al Congreso de la República, sino simplemente el otorgamiento de facultades extraordinarias.

¹ Constitución Política de 1886, artículo 79-10



La ruta correcta debe ser que a través el legislativo se debata la normatividad concerniente a la estructura y planta de personal de la Fiscalía General de la Nación, así como su régimen de carrera especial y la creación de una nueva entidad estatal, y todos aquellos asuntos de un complejo contenido técnico sean objeto de regulación a través del Gobierno Nacional.

La Corte Constitucional ha establecido frente al otorgamiento de facultades extraordinarias lo siguiente: *“la utilización excesiva de facultades extraordinarias debilita el principio democrático ante el empobrecimiento de la deliberación al interior del Congreso, relativiza el principio de separación de poderes y acentúa el carácter presidencialista del régimen político”*².

Es un Estado social y democrático de derecho no es viable cercenar las competencias del Congreso de la República, más aún cuando recientemente han sido expedidas normas de un importante contenido jurídico como lo son los códigos, verbi gracia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley (1437 de 2011) y el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional (Ley 1563 de 2012), así como la Escisión de dos Ministerios (Ley 1444 de 2011). Estas y otras importantes normas se han tramitado con éxito en el Congreso de la República, ante lo cual irreductiblemente surge el interrogante de por qué en este caso toda la competencia legislativa se le debe trasladar al Presidente de la República sin hacer un debate democrático al interior del Congreso.

En otra de sus providencias la Corte Constitucional se refirió al carácter particular de las facultades extraordinarias en los siguientes términos:

*La concesión de facultades extraordinarias altera el reparto ordinario de competencias normativas entre el Congreso y el Ejecutivo. Es pues una institución excepcional; por ello, conforme a clásicos principios hermenéuticos, la interpretación del alcance concreto de la extensión de esas facultades debe ser estricta y restrictiva (...)*³

Ahora bien, resulta igualmente preocupante que dentro de las facultades extraordinarias que consagra éste proyecto de ley, se establece la creación de un establecimiento público de educación superior, sin que a su vez se haya conocido un pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación sobre los efectos e implicaciones que trae consigo la creación de este tipo de establecimientos.

² Corte Constitucional, Sentencia C-366-12

³ Corte Constitucional, Sentencia C-562-96



En ese mismo sentido no se puede determinar específicamente cuál va ser el objeto esencial de éste establecimiento público, a qué personas va capacitar, qué clase de títulos se van a expedir, dudas que no se superan con la explicación que se da en la exposición de motivos.

Lo anterior corrobora la idea de que no son temas menores los que propone éste proyecto de ley y que a su vez merecen un amplio debate y deliberación del que no se puede privar al Congreso de la República.

En conclusión este proyecto de ley otorga exclusivamente al Presidente de la República, la facultad de regulación de determinados temas que bien pueden ser discutidos y debatidos al interior del Congreso de la República sin debilitar los principios democrático y de separación de poderes. Adicionalmente no existe una razón suficiente que justifique el no permitir al Congreso de la República llevar a cabo este tipo de debates, y se utilice al legislativo simplemente para dar el aval de habilitar la vía jurídica para que esta regulación la realice integralmente el Gobierno Nacional.

PROPOSICIÓN

Por las anteriores consideraciones, me permito solicitar a los miembros de la plenaria de la Cámara de Representantes, **Archivar** el Proyecto de Ley No. 193 de 2012 Cámara “*por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro témpore al Presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas*”.

Cordialmente,

ALFONSO PRADA
Ponente

GERMAN NAVAS
Ponente